

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, cuatro (04) de mayo de dos mil veintiuno (2021).**

SENTENCIA DE TUTELA NO.69

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por la **WILLIAM DÍAZ RODAS** en contra de la **LADRILLERA ALTAVISTA** por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la petición.

I. ANTECEDENTES

Refiere la accionante que día 5 de marzo de 2021, presentó derecho de petición ante **LADRILLERA ALTAVISTA**, la cual fue recibida por dicha entidad, en donde solicitaba información y una documentación.

Que dentro de la petición formulada, se indicó que la dirección para recibir notificaciones en la ciudad de Manizales era en la Carrera 20 No. 21-27, Edificio de la Patria, centro, Manizales y mediante correo electrónico a la dirección sierragiraldoabogados@gmail.com.

Refiere que aún no se ha dado respuesta de fondo y completa a la petición, ni se ha hecho uso de la posibilidad contemplada en el parágrafo del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por ello, manifiesta que se hace evidente la violación flagrante del derecho de petición.

II. PRUEBAS

Aportadas por la accionante: Copia de derecho de petición, copia de la guía por medio del cual se envió el derecho de petición.

III. TRÁMITE

Mediante auto fechado 22 de abril de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a la entidad accionada, para que se sirva dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitara las pruebas que pretenda hacer valen para su defensa.

IV. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.


Pese a estar debidamente notificada, la accionada **LADRILLERA ALTAVISTA** no dio respuesta a la acción de tutela.

NOTIFICACION ADMISION ACCION DE TUTELA 2021-00230

Juzgado 06 Civil Municipal - Caldas - Manizales <cmpal06ma@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 23/04/2021 7:41 AM

Para: sierragiraldoabogados@gmail.com <sierragiraldoabogados@gmail.com>; info@ladrilleraaltavista.com
<info@ladrilleraaltavista.com>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

03AdmiteTutela2021230.pdf, 02EscritoTutelaAnexos2021230.pdf,

V. PROBLEMA JURÍDICO.

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneró el derecho fundamental constitucional de PETICIÓN al accionante por parte de la entidad accionada, al no brindar respuesta al derecho de petición incoado.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VI. CONSIDERACIONES

DEL DERECHO DE PETICIÓN

Debiendo analizar desde el punto de vista constitucional y legal, y acudiendo al criterio de interpretación sistemático (que busca el enlace de todas las instituciones y reglas jurídicas dentro de una magna unidad); cual ha sido el trato dado al DERECHO DE PETICIÓN. Miremos:

Respecto al derecho de petición, la Constitución Política de Colombia lo consagra como un derecho fundamental, derecho instituido en el artículo 23, que reza:

“...Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Dicho derecho igualmente se encuentra desarrollado por precisos mandatos legales, es así como la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, que sustituye el Título II del derecho de petición, Capítulo I y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículos 13 al 33), desarrolla en forma armónica dicho derecho; consagrando las diversas clases de peticiones que pueden ser ejercidas, la forma de su presentación, los asuntos que pueden comprender, el trámite que debe observarse, los términos para dar respuesta, la forma de notificación de las decisiones, los efectos de las mismas y la responsabilidad por la desatención al derecho ejercitado.

Acerca del carácter fundamental de este derecho, tenemos que la Corte Constitucional en numerosas oportunidades, se ha pronunciado de manera positiva en cuanto al derecho de petición como uno de aquellos derechos que por sus connotaciones y repercusiones, debe ser catalogado y tratado como fundamental, por ende, amparable bajo la figura de la acción de tutela.

El máximo tribunal de lo constitucional, ha establecido el conjunto de características de la respuesta al derecho de petición, identificando la oportunidad, la pertinencia de la respuesta, y la comunicación de la misma al petente, como dispositivos inherentes y esenciales a éste. Es así como sintetizó las propiedades de este derecho en sentencia T-377 de 2000 de la siguiente manera:

“...4. En relación con el derecho de petición, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido estos parámetros:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Sino se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine (...).”

Teniendo como punto de partida la anterior definición, lo consagrado por la Constitución Política y las diversas clases de peticiones contenidas en la Ley 1755 de 2015, se hace necesario determinar qué clase de petición es la presentada en este asunto; para el efecto vale la pena traer a colación la norma ya referida, la cual establece en su artículo 32 que:

“...Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.

Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las

provenientes de terceros países se registrarán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.

PARÁGRAFO 1o. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.

PARÁGRAFO 2o. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.

PARÁGRAFO 3o. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes”.

I. CASO CONCRETO

La parte actora interpone este mecanismo sumarial, con el fin de que se proteja su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la accionada, al no darle respuesta a su solicitud, en la cual solicitó:

1. Se me entregue copia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo utilizado por la empresa para el momento en que acaeció el accidente de trabajo que sufrí el día 12 de agosto de 2017 del cual se desencadenaron mis infortunios, con la respectiva firma del representante legal y el encargado de desarrollarlo, donde se determinen los riesgos de la actividad económica del empleador y el cronograma de actividades, y que asimismo se establezcan las revisiones periódicas y reajustes anuales frente al SGSST

2. Se me informe y entregue constancia o documento acerca de las medidas de prevención utilizadas por la empresa contratante a la fecha del accidente ocurrido el día 12 de agosto de 2017, donde consten estas medidas frente a los riesgos ocupacionales de las funciones que desarrollaba en la empresa.

3. Se me entregue constancia acerca de los elementos de protección de seguridad personal que fueron brindados por el empleador para las funciones que desarrolle en la empresa para el 12 de agosto de 2017, de acuerdo con los factores de riesgo a los que me vi expuesto, ajustada a las normas técnicas y de seguridad adoptadas por el gobierno nacional

4. Se me entregue certificación acerca del mantenimiento efectuado a la máquina en la cual acaeció el infortunio del que fui víctima el día 12 de agosto de 2017, donde conste monitoreo, uso y manipulación de peligrosidad del mismo

5. Se me entregue constancia donde se evidencia la señalización para el 12 de agosto de 2017 con la que contaba la empresa frente al puesto o sitio de trabajo, herramientas y máquinas de trabajo con los respectivos colores en materia de seguridad industrial

6. Se me entregue certificado de la capacitación y adiestramiento brindado por la empresa para el desarrollo de mis funciones en la empresa, con la respectiva parte teórica y práctica conforme al Art. 356 de la Resolución 2400 de 1979

7. Se me entregue documento donde conste la información otorgada por la empresa sobre los riesgos ocupacionales de la actividad que tuve que desarrollar en la empresa y frente a los riesgos ocupacionales a los que me encontraba expuesto como trabajador

8. Se me informe y entregue constancia acerca del servicio oportuno, inmediato y eficaz de primero auxilios, brindado por la empresa al momento del accidente el día 12 de agosto de 2017, donde se evidencie las medidas pertinentes tomadas por la empresa para el restablecimiento de mi salud.

9. Se me informe acerca de si una situación similar a la acaecida el día 12 de agosto de 2017, fecha de la ocurrencia del accidente, había ocurrido en la empresa

La acción de tutela fue admitida y notificada a la accionada, LADRILLERA ALTAVISTA quien no se pronunció frente al mecanismo constitucional impetrado y según información brindada por el accionante en llamada telefónica que hiciera el despacho, no le ha dado respuesta al derecho de petición incoado.

Así las cosas, claro resulta que la demora en dar la respectiva respuesta a la accionante sobre su solicitud, deviene de la falta de debida diligencia por parte de la LADRILLERA ALTAVISTA, demostrando una clara falta de diligencia frente a un derecho fundamental de las personas como lo es el derecho de petición, por lo que no le queda otro camino a este despacho que tutelar el derecho de petición incoado por el señor **WILLIAM DÍAZ RODAS** en contra de la **LADRILLERA ALTAVISTA**, ordenándose a esta última dar respuesta de fondo, completa y en los términos que el accionante solicitó en el derecho de petición elevado el 05 de marzo de 2021, dentro de un plazo máximo de 48 horas

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por el señor **WILLIAM DÍAZ RODAS** en contra de la **LADRILLERA ALTAVISTA** por lo dicho en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **LADRILLERA ALTAVISTA**, dar una respuesta de fondo, completa y en los términos que el accionante solicitó el derecho de petición elevado por este el 05 de marzo de 2021, dentro de un plazo máximo de 48 horas, contados a partir de la notificación de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **325f89f50a3f52e6d98a1290e1467c1b4526d2a6da0fc69b66929ea47375ddb7**

Documento generado en 04/05/2021 04:52:26 PM